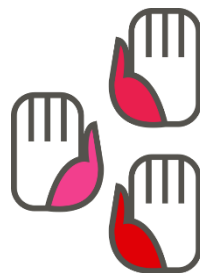


Baja California y Tabasco: leyes a modo de signo antidemocrático



Observatorio de
Participación Social y
Calidad Democrática



4 de septiembre de 2019

Baja California y Tabasco: leyes a modo de signo antidemocrático¹

Resumen

La democracia se encuentra bajo asedio en el ámbito subnacional. Por la vía del Poder Legislativo, en Baja California y en Tabasco se han cometido atropellos al orden electoral y de libertades que, de no ser frenados, podrían expandirse. En ambos estados es Morena la fuerza política beneficiada. Los ojos están puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como salvaguardia de las libertades democráticas.

Baja California: fraude a la ley y a la ciudadanía

El 2 de junio de este año, los bajacalifornianos acudieron a las urnas y eligieron como gobernador para el periodo 2019-2021 al morenista Jaime Bonilla Valdez, quien a pesar de haber impugnado la reforma que acortó en 2014 el periodo de gobierno en cuestión a fin de empatar las elecciones locales y las federales en 2021, aceptó participar en la contienda para ocupar una gubernatura de dos años.

Sin embargo, la noche del 8 de julio 21 diputados aprobaron una modificación

constitucional al artículo octavo transitorio del decreto 112 de 2014 para ampliar el periodo de la gubernatura de Bonilla Valdez de dos a cinco años. Se trató de una sesión extraordinaria, la antepenúltima previa a la clausura de los trabajos de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California.

La iniciativa fue presentada por el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, coordinador de la bancada de Morena, y contó con el apoyo de nueve diputados del PAN, cinco del PRI, tres de Morena y diputados en lo individual del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y del partido local Transformemos. En su exposición de motivos, la iniciativa plantea que el proceso electoral de 2021 representaría un golpe a las finanzas públicas del estado, uno de los más endeudados del país. Por otra parte, señala que un periodo de dos años es insuficiente para establecer un plan estatal de desarrollo y planes regionales.

Al contar con el apoyo de 21 de los 25 diputados del Congreso local, la iniciativa de reforma constitucional pasó a los ayuntamientos y fue avalada el 9 de julio por tres de los cinco municipios del estado: Ensenada, Playas de Rosarito y

¹ Este análisis fue elaborado por Roberto Alonso, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

Tecate. Con este respaldo legal, fue en el palacio municipal de Playas de Rosarito, una sede alterna al Congreso y a puerta cerrada, donde únicamente 15 diputados validaron el 23 de julio la que para entonces ya era conocida como “Ley Bonilla”. La sede del Legislativo había sido bloqueada días antes por ciudadanos que se manifestaron en su contra.

En dicha sesión, los diputados rechazaron un exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dejar sin efecto la Ley Bonilla. Un día después de su aprobación final por el Congreso local, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid declaró que no publicaría la reforma en el *Periódico Oficial del Estado de Baja California*.

El 1 de agosto inició sus trabajos una nueva legislatura, la XXIII, en la que Morena cuenta con 13 de las 25 curules. Al rendir protesta como diputado y primer presidente de esta, el morenista Catalino Zavala Márquez anunció que solicitaría la promulgación de la Ley Bonilla que la anterior legislatura no turnó al Poder Ejecutivo y puntualizó que será la SCJN la que terminará resolviendo en torno a su constitucionalidad. Desde mediados de julio, diversos actores políticos facultados para ello advirtieron que una vez publicada interpondrían acciones de inconstitucionalidad en su contra.

Ante el anuncio del diputado Zavala Márquez, el gobernador Vega de Lamadrid cambió de opinión y declaró que publicaría el decreto a fin de dar lugar a las impugnaciones. No obstante, el documento no sólo sigue sin ser remitido al Ejecutivo estatal para su publicación, sino que el Congreso local, ahora sí con mayoría morenista, decidió crear una comisión especial para consultar a la ciudadanía en torno a la ampliación de la gubernatura.

Con 17 votos de Morena, del Partido Verde, del PT y de un diputado independiente, el diputado Zavala Márquez justificó la consulta señalando que se trata de la mejor opción para legitimar la extensión del periodo de gobierno de Bonilla Valdez.

La Constitución y la Ley de Participación Ciudadana de Baja California prohíben la realización de consultas en materia electoral. En representación del Congreso local, el diputado Zavala Márquez ha destacado que la consulta se realizará con recursos de los diputados y su resultado determinará si continúa el trámite para su publicación o se frena la reforma.

Si bien los municipios de Mexicali y Tijuana, así como el PAN, impugnaron la Ley Bonilla ante la SCJN, el máximo tribunal del país desechó por

improcedentes los recursos al no haber sido publicada aún la reforma.

Tabasco: criminalización de la protesta

A poco más de seis meses de haber iniciado su administración en Tabasco, el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández advirtió en una entrevista radiofónica que en su estado no se tolerarían los bloqueos de vialidades y edificios públicos. El contexto de la entrevista era la dispersión de una manifestación de familiares y estudiantes rechazados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a cargo de policías antimotines el 8 de julio. Los familiares habían cerrado una avenida en Villahermosa y montado un plantón frente a la rectoría de la institución.

Tres semanas después, el Congreso de esta entidad aprobó reformas al Código Penal de Tabasco que castigan con penas más severas a quienes impidan la ejecución de obras públicas y privadas o realicen bloqueos en las calles. Las reformas fueron propuestas por el gobernador el 24 de julio y aprobadas cinco días más tarde, sin tiempo suficiente para el debate, con 24 votos a favor de 31 diputados que integran la LXII Legislatura. En el Congreso local Morena tiene la mayoría con 21 legisladores.

De acuerdo con el dictamen, los cambios en los artículos 299, 306, 307 y 308, junto con los nuevos artículos 196 Bis y 308 Bis responden al aumento de la incidencia delictiva y al interés de garantizar el orden y la paz pública para asegurar la inversión.

Según el decreto publicado el 31 de julio en el *Periódico Oficial del Estado de Tabasco*, fueron incrementadas las penas en los delitos de: 1) extorsión, 2) oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas, e 3) interrupción o dificultamiento (sic) del servicio público de comunicación. Asimismo, se introdujo como nuevo tipo penal el impedimento de ejecución de trabajos u obras privadas (196 Bis), con penas de seis a 13 años y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aumentando en una mitad si la acción exige dádivas, es violenta o la cometen dos o más personas.

Adicionalmente, se incluyó un tipo penal (308 bis) para sancionar de la misma manera a quien “extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y

medios de comunicación de jurisdicción local”².

Las reformas entraron en vigor el 1 de agosto y fueron calificadas en la opinión pública como represivas y violatorias de derechos humanos, recibiendo el mote de Ley Garrote. El mismo día de su publicación, Amnistía Internacional destacó que los cambios ponen en riesgo la libertad de expresión y reunión, siendo “un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos”³ y de las manifestaciones públicas. En respuesta a las críticas recibidas, el gobernador de Tabasco dio a conocer que su administración defenderá los cambios en el Código Penal e indicó que las reformas no tienen por objeto impedir la libre manifestación de las ideas, sino castigar con mayor firmeza la extorsión, delito en el que el estado encabeza la tabla nacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, calificó como preocupantes las modificaciones al Código Penal de Tabasco. En una carta dirigida al Estado mexicano tres relatorías especiales de la ONU manifestaron que la Ley Garrote penaliza

“conductas que podrían ser una expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender derechos humanos.”⁴ En su misiva, los relatores reconocen “la importancia de sancionar la extorsión relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras”⁵, sin embargo, subrayan que toda restricción debe estar sustentada en el principio de proporcionalidad, siendo excesivo el uso de la sanción penal para regular la protesta social.

A mediados de agosto, fuerzas estatales y federales, entre ellas elementos de la Guardia Nacional, liberaron dos pozos petroleros de Pemex en la localidad de Oxiacaque del municipio de Nacajuca. En palabras del gobernador de Tabasco, grupos pseudo-sindicales mantenían bloqueados estos pozos desde hace algunos años, extorsionando a personal de Pemex para ingresar a sus instalaciones.

¿Ensayos de autoritarismo?

Lo ocurrido en Baja California y en Tabasco es alarmante. El intento de

² Así consta en la página 9 del decreto 115 publicado en el *Periódico Oficial del Estado de Tabasco* con fecha del 31 de julio.

³ Ver “México: En riesgo libertad de expresión y defensa de los derechos humanos”, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/mexico-en-riesgo-libertad-expresion-defensa-derechos-humanos/>

⁴ La carta está disponible en:

http://hchr.org.mx/images/doc_pub/carta_rel_libex_24793.pdf

⁵ *Ibidem*.

ampliar arbitrariamente la duración de un periodo de gobierno e imponer intereses personales sobre el valor del sufragio, es una afrenta a la democracia. Lo es también la creación y el endurecimiento de penas a la carta de los gobernantes para reaccionar ante la protesta social, la movilización y la libre manifestación de ideas. Ambos casos empañan el ambiente político local y nacional en el inicio de lo que se ha denominado un cambio de régimen, y ensombrecen el panorama con nubarrones autoritarios.

Tanto en Baja California como en Tabasco, Morena es el partido político beneficiado con las reformas aprobadas. En las elecciones presidenciales del año pasado y en las estatales de este año, los electores le dieron una clara mayoría nacional a esta fuerza política cansados del bipartidismo PRI-PAN que en no pocas ocasiones pervirtió la democracia. Morena puede continuar debilitando el lastimado Estado de derecho o fortalecerlo con el suelo democrático que el país requiere. Poder impugnar abusos como la Ley Bonilla y la Ley Garrote y no hacerlo supone una seria omisión.

Las razones expuestas en cada contexto –evitar periodos de gobierno tan breves y, con ello, gastos excesivos en Baja California; y combatir la extorsión y los chantajes en Tabasco– no justifican pasar por alto derechos civiles y políticos como el derecho al voto, el derecho a la

protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión. En voz de la dirigencia del partido que es gobierno a nivel nacional, estos argumentos son muestra de un desapego al orden constitucional.

Los principios de certeza y legalidad electoral han sido vulnerados en Baja California por la discrecionalidad de una mayoría legislativa a punto de concluir sus funciones. Las reglas electorales han quedado en entredicho y también la rendición de cuentas de la representación popular. En Tabasco avanza una tendencia hacia la restricción del espacio público y la criminalización de la protesta social, que no es nueva pero que sorprende por el lugar en el que se presenta: el estado del que es originario el actual presidente de la República, en cuya trayectoria ocupan un lugar importante las protestas, la movilización social y los bloqueos en vías públicas.

Resulta reprobable que no conforme con el atropello democrático provocado con la reforma constitucional, el Congreso de Baja California quiera engañar a la ciudadanía haciéndola participe de su ilegalidad a través de una consulta que no parece tener otro propósito que el de ganar tiempo y obstaculizar la impugnación de la Ley Bonilla.

Las normas electorales son susceptibles de modificación en aras del

perfeccionamiento y mejor funcionamiento del sistema electoral, no obstante, para ello existen formas y procedimientos que protegen los principios rectores del juego electoral. La extorsión y el sabotaje son, en definitiva, actos indeseables a sancionar. Querer perseguirlos pasando por encima de las libertades fundamentales es un abuso. Más aún si se hace con proyectos polémicos en ciernes como la construcción de la refinería Dos Bocas y del Tren Maya.

democráticos se repitan en otras entidades.

Control constitucional

Es de la mayor importancia que la Ley Bonilla y la Ley Garrote sean examinadas por la SCJN a la luz de los principios constitucionales y de los mayores estándares internacionales en materia de derechos humanos que rigen también la vida constitucional del país.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco y la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano han interpuesto ya acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Garrote. La Ley Bonilla tiene que ser publicada para poder ser objeto de un recurso de este tipo.

La resolución de la SCJN ha de ser contundente para que la pulsión autoritaria encuentre contrapesos efectivos y evitar que estos retrocesos